

de 14 de Febrero de 1826, y la 8ª tit. 32 part. 3ª, sedceretaz.

Primeros: Que es de confirmarse y se confirma el auto pronunciado por la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito fungiendo como de Circuito, en 4 de Agosto próximo pasado, que declaró insuplicable el dictado por la propia Sala en 3 de Mayo del mismo año, y por el que se confirmó el del Juez 1º de Distrito de esta Capital en 13 de Setiembre del año citado.

Segundo: se condena á la parte del Lic. Primo de Rivera, al pago de las costas legales que se hayan causado con ocasion del presente recurso.

Remítanse las actuaciones al Tribunal de su origen, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes.

Hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Julio 5 de 1874.—*E. Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por José María Chavez, contra el Ayuntamiento de Zacapú, que ha ocupado parte de un terreno de su propiedad, con violación de la garantía consignada en el artículo 27 de la Constitución federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

José María Chavez vecino de Zacapú, se ha presentado ante V. exponiendo en su es-

crito de 14 del que fna, que el Ayuntamiento del citado pueblo lo ha despojado de un solar de su propiedad que comprende siete varas de latitud por veinticuatro de longitud, de un horno y de una cocina, con el objeto de abrir una calle nueva que se juzga inútil, quedando á la vez cegado un pozo, y obligándosele á abandonar con su familia la casa de su propiedad. Con semejantes hechos cree violadas en su persona algunas garantías constitucionales, pero muy especialmente la que consigna el artículo 27, por lo que pide se le ampare con arreglo á la ley, y ofrezca pruebas.

La autoridad informante acredita con las actas respectivas de las sesiones del Ayuntamiento, y con una informacion testimonial de su institucion peculiar, la de que se viene tratando. Como esta materia es enteramente obvia, no hay para que estenderse sobre ella.

Respecto de la segunda cuestion, se hallan perfectamente acreditadas las condiciones del artículo constitucional, habiéndose ya fijado por autoridad competente, que es un principio de utilidad pública la mejora y progreso de las poblaciones. (Ejecutoria de la Suprema Corte de 14 de Marzo de 1871, página 300 del tomo 1º del Semanario Judicial).

En virtud de lo expuesto y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, el Promotor pide se declare: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. José María Chavez, contra los actos del Ayuntamiento de Zacapú, en virtud de los cuales cree violadas en su persona las garantías constitucionales del artículo 27; y que no se le imponga la multa de la ley por su notoria insolvencia.

Morelia, Marzo 20 de 1874.—*N. Caba-llero.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Mayo 26 de 1874.—*Isidro Aleman.*

Segundo Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

En el presente juicio de amparo, el Promotor ha examinado las pruebas que rindió la parte quejosa y los fundamentos de su último alegato; y como no encuentra contrariado por motivo alguno legal el procedimiento del Cuerpo Municipal de la Villa de Zacapú, que ha dado origen á este juicio, reproduce en todas sus partes el pedimento de 30 del pasado, con las siguientes observaciones.

La parte quejosa se ocupa, en primer lugar, de desvirtuar el informe justificado de la autoridad responsable, y en segundo lugar se empeña en sostener el valor jurídico de sus pruebas como conducentes al objeto que se propone.

Para lo primero, sostiene que una parte de los testigos examinados por el Alcalde de Zacapú, fueron miembros del Ayuntamiento que determinó la apertura de la calle, y que sus declaraciones fueron recibidas por una autoridad que no podía ejercer jurisdicción por la falta de protesta á las adiciones constitucionales.

Ni en el informe justificado, ni en las pruebas del quejoso se encuentra demostrado que hayan sido miembros del Ayuntamiento, las personas cuyo dicho se pretende nulificar por este solo hecho. Lo único que aparece, es, que dos de los declarantes fueron comisionados por el citado Ayuntamiento, para entrar en arreglos con Chavez, y que sin embargo de que esté estuvo ausente, manifestó lo contrario después de comenzada la apertura de la calle en el punto que se necesitaba para alinear la antigua, sin haber querido recibir como indemnización la parte señalada por los peritos.

Tampoco es un hecho acreditado que el Alcalde ante quien se recibió la información del Ayuntamiento, haya dejado de protestar, pues sobre esto no hay mas que el dicho de la parte quejosa, que como interesa-

da no merece fé. Por lo que toca á los demás puntos de del informe justificado, ya se ha dicho lo bastante respecto de su validez en el anterior pedimento, y solo hay que examinar las pruebas de Chavez.

En lo conducente al juicio de amparo, tan solo hay que ver el interrogatorio de la foja 14, y las diligencias que se refieren á él hasta la 17. Los puntos principales son: que el solar en cuestion es de la propiedad de Chavez; que fué ocupado contra su voluntad para abrir una calle innecesaria, supuesto que nunca había habido tránsito por dicho solar; que en dicha ocupacion se le obstruyeron algunas obras de su propiedad, habiendo arrojado violentamente de la casa á la familia, y finalmente que no se le indemnizó de estos perjuicios.

De los cuatro testigos que al efecto presentó, tan solo deben considerarse tres, por que el segundo (fojas 16) es pariente del mismo interesado; artículo 725 del Código de procedimientos civiles en su fraccion 6ª

Prescindiendo de si está ó no legalmente acreditada la propiedad que tenga José M^º Chavez en el solar, por que sobre esto lejos de haber contradiccion de parte, se tiene como un hecho acreditado, deberán tan solo tomarse en cuenta los puntos subsecuentes del interrogatorio.

El primer testigo dice: que el Ayuntamiento ocupó el solar en cuestion contra la voluntad de Chavez, sin la previa indemnizacion, y que le consta de vista, así como el haber sabido por D. Juan Ciprés la falta de indemnizacion. El tercer testigo depone tan solo acerca de la apertura de la calle, por haber trabajado en ella como peon, y el cuarto asegura lo mismo como testigo presencial.

A primera vista aparece bien comprobado el hecho capital, que sirve de base á este juicio; pero un ligero exámen basta para persuadirse de lo contrario. En efecto, los testigos han dicho que vieron abrir la calle en cuestion, asegurando dos, que Chavez se oponia, sin haber acuerdo perfecto acer-

ca de la indemnización. Pero como desde antes se ha justificado por la autoridad informante que se mandó alinear la calle, ocupándose para ello una parte del solar de Chavez, quien después de estar anuente manifestó lo contrario, estando ya en obra los trabajos, no hay para que extrañar el que los testigos hayan visto el hecho de que se trata, que si bien tiene su importancia legal para el intento del quejoso, considerándolo aisladamente, no la tiene con relación directa con todos los antecedentes de este juicio, que es como debe examinarse. Así pues, el resultado final lejos de venir en apoyo de la parte quejosa, justifica el proceder del Ayuntamiento. En punto á la indemnización dice el primer testigo, que de oída supo su falta de cumplimiento; el tercero nada depone sobre el particular, y el cuarto sostiene que le consta de vista. Como se vé, no hay mas que un solo testigo, que no merece fé conforme al artículo 793 del citado Código, y esto aun cuando para el presente caso debiera tenerse como legal la razón de su dicho, por tratarse de un hecho en que no es muy de creerse haya intervenido el testigo.

Iguales observaciones deben hacerse respecto de las siguientes preguntas y respuestas del interrogatorio, por lo que no hay para que detenernos en cada una de ellas, debiéndose tan solo observar en lo relativo á las contestaciones de la quinta pregunta, que el dicho de los testigos no se encuentra fundado de la manera que se previene en la fracción 3ª del artículo 788 del mismo Código, y por lo mismo no merece fé.

Pero permitiendo sin conceder que fueran legales las declaraciones examinadas, aun en este caso debería resolverse la presente cuestion por las informaciones del Ayuntamiento, supuesto que los testigos presentados al efecto sobre ser mas caracterizados, son mayores en número, y por lo mismo se hallan en el caso del artículo 795 del referido Código.

En cuanto á la manera con que juzio

TOMO VI.—PARTE II.

acreditar el monto de los perjuicios que se supone causados con la apertura de la calle, se vé inmediatamente que el medio de justificación no es el reconocido en derecho para el caso de que nos ocupa, por que tratándose de indemnización, deben estas descansar en el juicio pericial para dejar así satisfechos los legítimos intereses de las partes; y tan es cierto esto, que en estas cuestiones deben intervenir los peritos que designe la ley, siendo cada uno nombrado por ellas, y el tercero, en los terminos de la ley; como nada de esto aparece aquí, tal justificación no debe tomarse en cuenta, advirtiéndose que el interrogatorio respectivo comprende así mismo puntos que son ajenos al juicio de amparo. Antes de concluir el fiscal llama la atención del C. Juez sobre la prueba de contrario que se registra á la foja 19 y 20, por que ella viene plenamente confirmando lo que se ha expuesto como principal, para que se deniegue el amparo pedido.

Por lo demás, el Promotor reproduce el pedimento de que habló al principio.

Morelia, Abril 20 de 1874.—N. Caballero.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Mayo 26 de 1874.—Isidro Aleman.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Mayo 23 de 1874.—Visto este juicio de amparo intentado por José María Chavez, vecino del pueblo de Zacapú, contra el Ayuntamiento del mismo, por haberlo ocupado parte de un terreno de su propiedad, para abrir una nueva calle en dicho pueblo, creyendo violada con este acto, la garantía que otorga el artículo 27 de la Constitución general, y considerando: que tanto del informe justificado del Ayuntamiento de Zacapú, como de las demás constancias de autos, aparece probado.

Primero: que el motivo que impelió al Ayuntamiento á ocupar terrenos de propie-

dad particular, fué el de utilidad pública de la población, por tratarse de abrir una calle nueva, útil y necesaria.

Segundo: que todos los dueños de los terrenos ocupados, estuvieron conformes con esta determinación y nombraron un perito para el valor del terreno ocupado y perjuicios consiguientes, incluso el mismo quejoso.

Tercero: que se fijó la cantidad importe del terreno y valor de los perjuicios y se pagó á los interesados, menos á José María Chavez, por que no quiso recibirla.

Cuarto: que se depositó en regla la suma de quince pesos dos reales en que fueron estimados el terreno ocupado á Chavez y los perjuicios que se le causaron, con cuyos cuatro requisitos quedaron obsequiados los señalados en el artículo 27 de la Constitución general, para ocupar la propiedad particular por causa de utilidad pública, no habiendo habido por consiguiente violación de la garantía que otorga dicho artículo.

Por lo expuesto, y con fundamento del artículo 101 de la Constitución general de 1857, y de la ley de 20 de Enero de 1869, como pide el C. Promotor, se declara: que la Justicia federal no ampara ni protege á José María Chavez, contra el procedimiento del Ayuntamiento de Zacapú, por no haber este violado la garantía invocada; no se impone al quejoso la multa del artículo 16 de la última ley citada, por su notoria pobreza.

Lo decretó en definitiva, el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia. Morelia, Mayo 26 de 1874.—*Isidro Aleman*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 10 de Junio de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por D. José María Chavez, contra el Ayuntamiento de

Zacapú, que ha ocupado parte de un terreno de su propiedad, con violación de la garantía consignada en el artículo 27 de la Constitución federal. Visto el fallo del inferior, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Por sus mismos y legales fundamentos, se confirma la sentencia pronunciada en 23 de Mayo último por el C. Juez de Distrito de Morelia, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á José María Chavez contra el procedimiento del Ayuntamiento de Zacapú, por no haber este violado la garantía invocada.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publicándose y archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*Miguel Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*José María Lozano*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramírez*.—*Manuel de Castañeda y Nájera*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*Simón Guzmán*.—*Luis Velasquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto de 1874.—*Enrique Landa*.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito del Estado de México contra Cosme Sanchez y otros varios individuos, acusados de abusos electorales.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Toluca, Noviembre 20 de 1873.—Vista esta causa instruida de oficio contra los CC. Cosme Sanchez, Juan Mendoza, Mar-